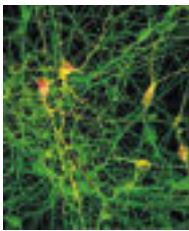




Prometo no copiar en los exámenes

Los campus intentan frenar la falta de ética académica **PÁGINAS 30 Y 31**



La madre de las células madre

Los científicos hallan alternativa al uso de embriones **PÁGINA 34**

La mejor España, a semifinales

Barre a Serbia (60-90) en cuartos del Eurobasket **PÁGINAS 47 Y 48**



OPERADORES DE INTERNET Y CREADORES PRESIONAN CON INTERESES OPUESTOS

El nuevo Código Penal combatirá la piratería con fuertes penas de cárcel

La ley castigará con prisión también a administradores o dueños de webs que enlacen con sitios donde se aloje material robado

IKER SEISDEDOS / VERA G. CALVO
Madrid

España va a perseguir por primera vez con penas de cárcel a los dueños o administradores de las llamadas webs de enlaces: los sitios de Internet que no ofrecen obras pirateadas, pero sí dan acceso —con ánimo de lucro— a otros sitios donde se aloja ese material, sin consentimiento de los autores y vulnerando el derecho de propiedad intelectual. Hasta ahora, la ley solo establecía penas de hasta cuatro años de cárcel para quien “reproduzca, plagie, distribuya o comunique” obras ajenas sin permiso de su autor. Pero nada decía de las webs de enlaces.

El proyecto de ley del nuevo Código Penal que aprobará en breve el Consejo de Ministros recoge el nuevo delito con penas que van de seis meses a seis años de cárcel, la retirada de los contenidos pirateados y, en los casos más extremos, el bloqueo de la página web. Esta propuesta, redactada desde Justicia, ha dado lugar a una acerbada disputa entre el Ministerio de Industria —presionado por los operadores de Internet que piden una ley más suave— y el de Cultura —presionado por los creadores que reclaman más dureza para evitar la sangría que sufren sus ingresos—. **PÁGINAS 38 Y 39**



DOS TORMENTAS SIEMBRAN EL DESASTRE EN MÉXICO. Las dos costas de México han padecido el paso simultáneo de tormentas tropicales, que han dejado al menos 57 muertos y 77 municipios afectados. En la imagen, saqueos en Acapulco, donde hay 36.000 turistas atrapados. / FRANCISCA MEZ (EFE) **PÁGINA 8**

Rajoy reduce la presión sobre los nacionalistas para facilitar el diálogo con Mas

El PP está convencido de que no habrá adelanto electoral

CARLOS E. CUÉ, Madrid

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha decidido reducir la tensión con CiU para facilitar el diálogo abierto a finales de agosto con el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Al Ejecutivo le preocupa que Mas pierda tanto apoyo de sus votantes que sea ERC la que se haga con el control de la situación o incluso con la Generalitat en unas elecciones. En este sentido, el PP está convencido de que Mas no adelantará los comicios, porque no le conviene. **PÁGINAS 10 Y 11**

La Reserva Federal mantiene los estímulos contra pronóstico

SANDRO POZZI, Nueva York

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió ayer mantener intacto su programa de estímulos monetarios para impulsar el crecimiento y despejar dudas sobre la economía estadounidense. La institución presidida por Ben Bernanke seguirá comprando deuda a un ritmo de 85.000 millones de dólares al mes. **PÁGINA 18**

Los científicos se movilizan para salvar la I+D del “colapso”

El objetivo es que el alza en los Presupuestos sea significativa

ALICIA RIVERA

La comunidad científica afronta un otoño convulso y decisivo. Tras cinco años ininterrumpidos de recortes, con las convocatorias científicas paralizadas y en medio de una masiva fuga de cerebros, se movilizan todos a una para lograr un oxígeno que salve la

I+D+i del “colapso”. El colectivo, que ha intentado sin éxito reunirse con el ministro de Economía, Luis de Guindos, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santama-

Señor ministro, no nos defraude otra vez

Artículo de Carlos Andradás **PÁGINA 33**

ría, está visitando a los grupos parlamentarios en un intento de recabar apoyos para conseguir una mejora presupuestaria significativa —ha caído de 4.276 millones de euros a 2.267 millones de euros desde 2009—. Los investigadores anuncian movilizaciones coincidiendo con la aprobación de los Presupuestos. **PÁGINAS 32 Y 33**

Lo mejor de milanuncios no es que sea

GRATIS

2.000.000 visitas/día

milanuncios.com

La mayor web de anuncios: coches pisos empleo contactos mascotas ordenadores televisores móviles motos aficiones deportes moda barcos traspasos perros relojes joyas chalets quads videojuegos fotografía instrumentos musicales locales muebles

ANDALUCÍA



SUSANA DÍAZ PROPONE EL BLINDAJE DE LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD PÚBLICAS. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó este jueves que “es el momento de replantearse muchas cosas, incluso la modificación de la Constitución para blindar la educación y la sanidad públicas, así como garantizar un modelo de inclusión en el que todos los ciudadanos sean iguales”. Díaz hizo esta reflexión al inicio de su intervención en el undécimo Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración, inaugurado en Sevilla con el lema *Política en tiempos de incertidumbre* en la Universidad Pablo de Olavide. Al acto asistió también el jefe de la oposición y alcalde de la capital andaluza, Juan Ignacio Zoido. /PACO PUENTES

Los rectores piden los 100 millones que prometió la Junta para iniciar el curso

La Universidad espera el plan del Gobierno para pagar a sus proveedores

MANUEL PLANELLES
Sevilla

El problema de la deuda que la Junta mantiene con las diez universidades andaluzas —entre 800 y 900 millones de euros— siempre está sobre la mesa cuando los representantes de los campus se sientan con la Administración regional. Los rectores se reunieron ayer con la nueva presidenta andaluza, Susana Díaz. Durante el encuentro —que se produjo a petición de los rectores—, el asunto de la deuda volvió a abordarse.

Los campus están a la espera de los 100 millones de pagos urgentes que el antecesor de Díaz, José Antonio Griñán, prometió cuando firmó en junio con los representantes de la Universidad un pacto en defensa de la enseñanza superior. Lo previsto era que ese dinero llegara antes de octubre, pero los cambios en la Junta tras la salida de Griñán han retrasado este pago. “Hacienda está trabajando y hay buenas perspectivas”, dijo ayer José Manuel Roldán Nogueras, rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía. Roldán reconoció que los cambios en la Junta han podido influir en el retraso, aunque dijo estar esperanzado con que llegue pronto y las universidades tengan “un poco de desahogo”.

Este sector también está pendiente de la resolución del plan

estatal de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones públicas, que el Gobierno central aprobó en junio. Este mecanismo estaba pensado para los proveedores de la Universidad y, en el caso de las andaluzas, se han presentado facturas por valor de unos 100 millones de euros. El plan es parecido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA): las comunidades reciben del Estado un préstamo para pagar parte de las deudas acumuladas con entidades bancarias y proveedores. Las universidades públicas se ha-

bían quedado fuera hasta ahora del FLA y, tras las reclamaciones de los rectores, el Ministerio de Hacienda incluyó finalmente en este real decreto contra la morosidad a sus proveedores.

La vía del FLA puede ser también la salida que se encuentre para la millonaria deuda acumulada por la Junta con las diez universidades de la comunidad. Eso fue lo que explicó ayer el rector cordobés, aunque para ello se tendrían que modificar las condiciones del fondo de liquidez para que también se incluya

a la enseñanza superior de forma preferente.

Pese a estas deudas y a que no han llegado aún los 100 millones prometidos, Roldán aseguró que “el curso va a comenzar con normalidad”. Según el representante de los rectores andaluces, las universidades son los suficientemente flexibles para soportar ese retraso.

Otro asunto que preocupa a los representantes de los campus es el de la investigación. Los recortes, según Roldán, están causando una reducción en este campo, lo que, a su vez, hace que las universidades pierdan valoración en las clasificaciones internacionales. El rector cordobés pidió que el nuevo modelo de financiación para el periodo 2014-2020, que se empezará a negociar en breve, incluya un plan de investigación.

El acceso a los estudios superiores también se abordó en el encuentro de ayer. Según Roldán, Díaz se comprometió a seguir “profundizando” en las ayudas que la Junta concedió el curso pasado para paliar los efectos del aumento del coste de los grados, principalmente en tercera y cuarta matrícula. Respecto al inicio del curso, el representante de los rectores señaló que la previsión es que se produzca una “ligera” reducción del número de alumnos, aunque aún no hay datos definitivos porque la matriculación sigue abierta.

Vacantes sin cubrir

M. P., Sevilla

El rector de la Universidad de Córdoba, José Manuel Roldán Nogueras, alertó ayer del proceso de “descapitalización” que están sufriendo los campus debido a las limitaciones impuestas desde el Gobierno central para la contratación de docentes. De continuar esta situación, las universidades podrían atravesar “verdaderas dificultades para impartir la docencia”, añadió el también presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía.

Roldán pidió a la Junta que presione al Estado para que la

tasa de reposición de los docentes aumente hasta el 30%. Ahora está en el 10%, con lo que solo se pueden cubrir diez de cada 100 jubilaciones o vacantes de profesores. Roldán estimó que, cada curso, no se están cubriendo entre 400 y 500 plazas de profesores por este motivo en Andalucía.

Los rectores llevaron ayer al Consejo Andaluz de Universidades una petición para que la Junta acceda a la contratación de unos 170 docentes a tiempo completo como personal laboral, una medida que permitiría cubrir las necesidades “urgentes” de las plantillas.

El PSOE desiste de aupar a Aguayo a la Mesa del Parlamento

LOURDES LUCIO, Sevilla

Finalmente, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo no ocupará un puesto en la Mesa del Parlamento después de que IU, socio de coalición del PSOE, haya mantenido su rechazo a esta renovación a mitad de la legislatura en el órgano de gobierno de la Cámara.

Desde la federación de izquierdas tampoco entienden que Aguayo haya salido del Gobierno para blindarlo de salpicaduras del caso de los ERE y que ese argumento no sirva para la Mesa del Parlamento. La exconsejera, según apuntó ayer el portavoz socialista, Francisco Álvarez de la Chica, ocupará la presidencia de una comisión, algo que suele ser habitual en el caso de los políticos que abandonan la primera línea. De la Chica atribuyó a Aguayo la renuncia a estar en la Mesa.

Tras la toma de posesión del nuevo Gobierno, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, abrió ayer la ronda de comparecencias en el Parlamento para presentar sus prioridades. Desde el primer minuto, Jiménez Barrios se mostró dispuesto a “buscar la complicitad del acuerdo” con los grupos y bajar el nivel de crispación política.

Caso de los ERE

Pero segundo y medio tardó la portavoz del PP, Eva Martín, en recordarle que este Gobierno “es heredero de los ERE” y que el Ayuntamiento de Chiclana, con él como alcalde, pidió una subvención procedente del polémico fondo. El consejero optó por eludir este debate en el que el Gobierno “no va a perder ni un minuto”. Sí recordó que la ayuda se destinó a una muestra cultural que gestionó como comisario el hoy alcalde del PP. “Vamos a poner el foco única y exclusivamente en mejorar la vida de los andaluces”, subrayó, aunque el PP no va de dejar de abanderar el fraude de los ERE para erosionar al Ejecutivo de Susana Díaz.

En respuesta al portavoz de IU, José Antonio Castro, Jiménez Barrios aseguró que el impulso legislativo será una prioridad del Ejecutivo en los próximos meses. “Hay que pisar el acelerador y meter en carga de trabajo a este Parlamento”, dijo Castro en tono de queja.

Este instó a que antes de diciembre, el Ejecutivo remita a la Cámara cinco leyes: la de transparencia; participación ciudadana; memoria democrática; lucha contra el fraude fiscal y social; y concertación local.



sociedad

Petróleo por salud y educación en la Amazonía

“No copiaré, no copiaré, no copiaré, no copiaré”

► Los expertos apuntan a un aumento de las prácticas deshonestas
► La Universidad Pública de Navarra intenta promover la ética académica exigiendo un compromiso firmado a sus alumnos

J. A. AUNIÓN

“Por la presente, me comprometo a no hacer uso de medios fraudulentos para la superación de mis estudios en la Universidad Pública de Navarra”. Todos los estudiantes de esa universidad están obligados a firmar una declaración de honestidad académica que empieza de esa manera. Lo hacen junto a su matrícula. Esta iniciativa, muy común en universidades norteamericanas y que ya contemplaban otros campus españoles, como el de Cantabria, está dentro de lo que Jaume Sureda y su equipo de investigación de la Universidad de las Islas Baleares llaman medidas de prevención —luego están las sancionadoras y las de detección— contra el problema de las prácticas académicas deshonestas. “La tendencia apunta a un aumento de esta clase de comportamientos”, asegura el profesor. En sus trabajos de los últimos años ha detectado que el 45% de los universitarios reconoce haber copiado en las pruebas escritas y más del 60% ha incurrido en alguna forma de plagio académico para hacer sus trabajos.

El hecho es que las chuletas de toda la vida y los apoyos excesivos en fuentes ajenas se han sofisticado enormemente con la irrupción de las nuevas tecnologías, lo cual ha resultado en el fenómeno de copiar y pegar. Así, aquellos métodos clásicos de detección basados en los paseos vigilantes del profesor por el aula también han tenido que ir poniéndose al día. Por ejemplo, numerosas facultades de toda España han ido probando en los últi-

mos años la instalación de inhibidores de frecuencia durante los exámenes para impedir la transmisión a través de Internet o del teléfono móvil de respuestas desde el exterior.

La Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia instaló el curso pasado esos inhibidores tras las quejas de algunos alumnos sobre el uso de pinganillos y teléfonos móviles. “Compramos uno y nos dejaron otros dos. Avisamos en las aulas de que están conectados y los quitamos cuando termina el periodo de exámenes”, explica el decano de la facultad, Federico Pallardó. Y continúa: “¿Funciona? Yo creo que sí, pero no tenemos datos; desde luego, no hemos vuelto a tener quejas”. En otras universidades, como la de Zaragoza, experimentaron hace años con estos aparatos, pero los han descartado; creen que es suficiente con prohibir la entrada a los exámenes con cualquier dispositivo electrónico (algo que, por otro lado, también hacen en Valencia).

Eso, en todo caso, se refiere a la parte de los exámenes, pero probablemente el mayor problema de la deshonestidad académica se centra hoy en el plagio, en ese copia y pega que ha puesto en evidencia a políticos que han tomado prestada una parte demasiado grande de sus tesis —Pál Schmitt se vio obligado a dimitir como presidente de Hungría—.

“Aunque resulta difícil cuantificar la incidencia del plagio en las universidades españolas, se trata de un problema frecuente y no me parece que sea nuevo ni tampoco exclusivo de nuestro

país”, señala la profesora de la Universidad sevillana Pablo de Olavide Yolanda Morató, y añade: “Lo cierto es que ahora es más fácil que nunca detectarlo. Hay profesores que siguen introduciendo frases entrecomilladas en Google. Pero, con la plataforma de aprendizaje WebCT, Blackboard proporciona la herramienta SafeAssign, que entrega al profesor un informe con el porcentaje de texto extraído de otras fuentes”. Las que cita Morató son solo algunas de las muchas herramientas informáti-

El 60% de los universitarios ha incurrido en algún tipo de plagio

Algunas facultades instalan inhibidores de frecuencia en época de exámenes

cas que se han ido desarrollando (unas son gratuitas; otras de pago) para facilitar la detección del plagio.

Si el alumno envía el trabajo en formato electrónico, el programa lo comparará automáticamente con los textos ya publicados en la Red. “Un trabajo con un 60% o 70% de fuentes ajenas demuestra que es una recopilación de citas en el mejor de los casos y un plagio significativo en el peor. Y el profesor se ahorra tener que estar introduciendo fragmentos en un buscador.

Así que ahora es más cómodo plagiar gracias a lo fácil que resulta copiar y pegar texto a partir de cualquier fuente disponible en Internet, pero también es mucho más fácil detectarlo”, insiste la docente de la Pablo de Olavide.

Pero estos programas no solo sirven para los alumnos, sino también para detectar comportamientos deshonestos de profesores e investigadores, recuerdan los estudiantes. “Es necesario garantizar los derechos de autor del alumnado y establecer vías de denuncia en caso de que se detecte que algún docente haya plagiado trabajos o investigaciones de estudiantes que tutorizan o que hacen trabajos dentro de sus asignaturas. Sobre todo, en el ámbito de la investigación. Este aspecto hasta ahora no está completamente protegido, a pesar de que el Estatuto del Estudiante reconoce los derechos de autor del alumnado en todos sus trabajos. Las universidades deben poner el mismo empeño para que el profesorado conozca nuestros derechos y también mayor dureza en sanciones en caso de incumplimiento del profesorado”, dice Aratz Castro, portavoz de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas Españolas (CREUP).

Castro asegura que los comportamientos deshonestos, tanto en trabajos como en exámenes, “son muy puntuales”, por lo que a los estudiantes les inquieta que se sobredimensione el problema y, en consecuencia, se sobreactúe. “Nos preocupa que el profesorado que sospeche de un estudiante pueda tomar me-



Los métodos para copiar en los exámenes se han sofisticado con ayuda de las nuevas tecnologías.

/ ANDY SACKS (GETTY)

didias, ya que eso supondría partir de la presunción de culpabilidad y eso puede tener un encaje jurídico dudoso. El profesorado debe tener pruebas fehacientes de que un alumno ha realizado una prueba fraudulenta”.

Por lo demás, desde CREUP consideran “que cualquier ini-

Las trampas más sonadas

► Copias en la mejor universidad del mundo.

Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, que aparece sistemáticamente en los primeros lugares de las clasificaciones, no se libra de los problemas de deshonestidad académica. Un alumno de la universidad a mediados de la década del 2000, Eric Kester, hablaba en un libro de una extendida “cultura de la copia”. El pasado febrero, la institución expulsó a 60 de los 125 alumnos

bajo sospecha de haber copiado nueve meses antes en un examen final. Se trataba de una prueba que se podía llevar a casa —práctica muy común en la universidad estadounidense— y entregar al día siguiente. Las respuestas de 125 de los 279 estudiantes eran sospechosamente parecidas.

► **Doctorado fraudulento, político dimitido.** El expresidente de Hungría Pál Schmitt, el exministro alemán de Defensa Karl-Theodor zu



El expresidente de Hungría Pál Schmitt.

Guttenberg, su excompañera de la cartera de Educación Annette Schavan y el expresidente del Bundestag Norbert Lammert tienen algo en común: todos ellos se vieron obligados a dimitir en los últimos años de sus cargos después de que se descubriera que habían plagiado al menos una parte de las tesis con las que consiguieron el título de doctor. En Alemania existen varias páginas en torno a las cuales se han organizado numerosos cazadores de plagios que han descubierto algunos de esos casos.



cultura

Martín de Riquer, el hombre de los datos exactos



deportes

Benzema, un delantero contra los tópicos



pantallas

Las ayudas públicas a la TDT son ilegales



copie, “siempre es mejor prevenir que curar y reducen el número de casos, pues cuando hay una normativa específica y mecanismos de control los alumnos se lo piensan dos veces”.

En este sentido, Sureda echa en falta normativas claras y específicas sobre honestidad académica. “Creo que es un error no adoptar un enfoque sistémico de la honestidad académica y poner en marcha medidas aisladas”. Así, habla en un reciente trabajo sobre las normativas de los campus españoles de “la disparidad, laxitud y escasa transparencia a la hora de establecer sanciones. [...] Una misma práctica fraudulenta en una evaluación puede implicar la obtención de un suspenso del acto evaluativo en una universidad, mientras que en otra puede suponer tener que repetir por entero la asignatura. Más grave se nos antoja la falta de transparencia y concreción que se esconde tras algunas fórmulas expresivas como, por ejemplo, ‘sin perjuicio de...’, que suelen referir al Reglamento de Disciplina Académica de 1954.

Esa, a pesar de los amagos de

“Es un problema cultural. No está mal visto copiar”, lamenta un decano

El Reglamento de Disciplina Académica en España es de 1954

ciativa que fomente el conocimiento de los derechos y obligaciones es positiva; es necesario informar de todos los derechos y deberes, ya que muchos problemas en la docencia y en la evaluación se solucionarían si profesorado y alumnado conociésemos las normativas”, señala. Aratz Castro se refiere en este caso a las declaraciones de honestidad.

“Es una obviedad que no deben copiar y que el hecho de hacerlo tiene sus consecuencias, pero se trata de recordar a los

estudiantes que una vez que entran en la Universidad se supone que son personas adultas y responsables de sus actos y que, como personas adultas, tienen que ser conscientes de que vienen a aprender”, explica un portavoz de la Universidad Pública de Navarra. “También se pretende fomentar una cultura ética y deontológica que está muy presente en otros países, pero que en España a veces no se acaba de asimilar. Esta es una cuestión, por ejemplo, que está implícita en universidades estadouni-

denses y canadienses, donde los alumnos se llevan los exámenes a casa y los hacen de un día para otro o en varios días, utilizando las fuentes que sean necesarias, pero garantizando siempre que es un trabajo original en el que no se usan métodos fraudulentos”, añade.

“Me temo que hay un problema cultural: si puedo copiar, copio, y no está mal visto. Una vez, un estudiante me dijo, con toda la inocencia del mundo: ‘¿Ah? ¿Que si copio me pueden abrir un expediente?’. ‘¡Pues, claro! Y

te pueden llegar a expulsar de la universidad”, cuenta Federico Pallardó. El decano de Medicina de Valencia señala que hay que fomentar una cultura de la honestidad y por eso ve bien esas iniciativas como las declaraciones de integridad. “Nosotros nos reímos mucho cuando llegamos a Estados Unidos y nos preguntan si tenemos previsto cometer algún delito, pero no es ninguna tontería”, añade.

La profesora Morató está de acuerdo en que, aunque esas iniciativas no garantizan que no se

varios Gobiernos de actualizarla, es la normativa disciplinaria que aún rige en la Universidad española. Una normativa propia de un país sometido a una dictadura que veía la Universidad como una continua fuente de problemas. Sureda insiste en que es necesaria una política amplia contra la deshonestidad, que incluya tanto sanciones como medidas preventivas (esas declaraciones de integridad, por ejemplo) y sistemas de detección mediante herramientas tecnológicas.

► Malas prácticas en ciencia.

Un estudio hecho en el ámbito de biomedicina en EE UU y publicado en la revista *Nature* en 2008 señaló unos 2.300 casos de posibles malas prácticas cada año (desde plagio a falsificación) sobre un colectivo 155.000 investigadores. Probablemente, la trampa reciente más famosa fue la del surcoreano Hwang Woo Suk: en 2005 anunció en la prestigiosa revista *Science* que había creado unas revolucionarias líneas de células madre embrionarias, pero unos meses después se descubrió que había falsificado



El exministro alemán Karl-Theodor zu Guttenberg.

los resultados. En España, el caso más reciente es el del veterinario del CSIC Jesús Ángel Lemus. El Comité de Ética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) calificó el año pasado como “sospechosos” 24 de los 36 trabajos en los que había participado, bien por la incongruencia de los datos, porque las entidades y laboratorios con los que decía trabajar no reconocían haberlo hecho o porque había dudas sobre la existencia de un colaborador que firmaba algunos de los estudios.

► Profesores que copian a

alumnos. En 2008, un profesor de una universidad italiana fue condenado a siete meses de cárcel y a pagar una indemnización de 3.000 euros a dos de sus alumnos porque algunos capítulos de un libro que había publicado estaban copiados de los trabajos de fin de carrera de sus estudiantes. En España, el Supremo condenó recientemente a un catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Murcia a pagar 5.000 euros por plagiar en un libro una tesis que había dirigido.



Protesta del Colectivo Carta Abierta por la Ciencia para exigir un cambio de rumbo en las políticas de I+D el año pasado. / ULY MARTÍN

Los científicos forman un frente para salvar la I+D del colapso

El colectivo se moviliza para buscar el apoyo de los grupos parlamentarios en los Presupuestos Generales ● Los investigadores anuncian acciones de protesta

ALICIA RIVERA

En medio de una escasez presupuestaria extrema y continuada que ha colocado al sistema español de I+D al borde del colapso, los investigadores afrontan los próximos meses con preocupación rayana en la alarma. Las sociedades científicas, rectores, sindicatos y asociaciones están intentando reunirse con Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad (con las competencias de I+D), y con la vicepresidenta del Gobierno para exponer la situación y lo que está en juego en estos Presupuestos Generales. De momento han empezado a reunirse esta misma semana con los grupos parlamentarios para intentar recabar su apoyo cara al debate presupuestario inminente. “La I+D está agotada tras la sequía que lleva padeciendo en los últimos años. La situación es límite y seguramente una parte será ya irre recuperable”, alerta Carlos Andradadas, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). “Pero el hermetismo del Gobierno es total y las peticiones de entrevistas con la vicepresidenta siguen sin ser contestadas”, añade. En una carta abierta en EL PAÍS, Andradadas pide al ministro de Economía, por boca del colectivo, que no les “defraude”, que incremente el presupuesto y que lo haga en la partida de subvenciones.

Los científicos, que hablan de una sola voz, no van a esperar quietos. Coincidiendo con la apro-

bación de los Presupuestos en Consejo de Ministros el próximo viernes 27, grupos de jóvenes científicos han anunciado diversas acciones dentro de la celebración de *La noche de los investigadores* de este año, y el Colectivo Carta por la Ciencia prepara nuevas movilizaciones una vez analizado el borrador de presupuestos ante una situación insostenible, adelanta el presidente de la COSCE. Dicho colectivo Carta por la Ciencia, integrado por la CRUE, los sindicatos (CC OO y UGT) y asociaciones de científicos, además de la COSCE, exige que se retomen los niveles de financiación pública de 2009, que ha caído de 4.276 millones de euros a 2.267 millones (excluido el capítulo de préstamos) y propone recuperar la inversión en los tres próximos años, con un incremento anual de 636 millones de euros. “De esta forma, podríamos comenzar a recuperar nuestra posición en Europa en cuanto a inversión pública en I+D y con ello marcar una senda de futuro para el país”, dice el colectivo. La realidad es que, tras cinco años de duros recortes, sufriendo una inexorable fuga de cerebros, con las plantillas de investigadores desmoronándose y el sistema de I+D plagado de retrasos y compromisos sin pagar, la ciencia española afronta un otoño caliente. La I+D necesita oxígeno urgente porque se está produciendo el “desmantelamiento de un sistema que ha costado décadas crear”, advertía antes del verano Carta por la Ciencia, que recogió más de 80.000 adhesiones a su segunda carta de denuncia y propuestas para salir del atolladero. De los problemas que sufre el sistema español de I+D se han hecho eco a menudo la prensa internacional y las revistas científicas más prestigiosas del mundo. “El gasto en I+D del Gobierno [español] se ha recortado en un 40% desde 2009, a pesar de que el presupuesto español está en los ran-

king mucho más abajo que otros países europeos”, recalca *The Financial Times* hace tres meses. Ponía un ejemplo: desde universidades y centros de investigación llegan quejas porque a veces no tienen dinero para pagar guantes, batas de laboratorio y material básico como nitrógeno líquido. La revista *Nature* hablaba en julio de científicos “encolerizados”, “enfurecidos”, ante las medidas presupuestarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Conozco excelentes científicos que no tienen los medios para investigar y lo peor es que muchos tienen que irse de España”, declaró Peter Gruss, presidente de la Sociedad Max Planck alemana, cuando le fue comunicado el premio Príncipe de Asturias este año a dicha institución. Carmen Vela, secretaria de Estado de Estado de I+D+i, del Ministerio de Economía y Competitividad, ha repetido en los últimos meses que la situación es difícil pero no trágica, recalcando los efectos de la grave crisis económica que sufre España. Pero los problemas del siste-

van, también hay que contar con los que se han quitado de la cabeza la idea de volver. España había emprendido hace casi una década una escalada notable en la I+D y numerosos investigadores que estaban fuera empezaron a optar a las plazas competitivas que ofrecía el sistema. Otros salían para completar su formación pero con la vista puesta en desarrollar luego su ciencia en España. Con los recortes presupuestarios y los recursos humanos estrangulados, ese flujo de regreso se ha cortado. Todavía hay un tercer factor

que agrava el panorama. Los científicos que regresaron a España con un compromiso de estabilización de su trabajo al concluir los contratos de cinco años —si obtenían evaluaciones positivas— se sienten defraudados y vuelven a irse. Difícil será atraerlos de nuevo con la promesa de financiación, un sistema de investigación vigoroso y una estabilización de su trabajo. Y los más jóvenes, con el panorama que ven a su alrededor, tampoco se sienten precisamente motivados para embarcarse en la ciencia española.

La pérdida de los mejores

No hay cifras oficiales de la fuga de cerebros en España, a la espera de que la Secretaría de Estado de Investigación complete un estudio que ha anunciado para conocer “el tamaño y la envergadura” del problema. Recientemente, Carmen Vela declaró en Santander que si España es incapaz de “controlar la pérdida de talento”, el país tendrá dificultades, y aseguró que el Gobierno es consciente de ello. Aunque no haya cifras, la realidad es un goteo constante de investigadores que, ante la imposibilidad de encontrar en

España un puesto de trabajo para desarrollar su labor, buscan o aceptan ofertas de otros países. Nadie niega que se trata de una pérdida gravísima no solo por comprometer el futuro, sino también porque supone entregar a otros países gratuitamente el esfuerzo y la inversión que se ha hecho en formar a una generación de buenos investigadores. Los que emigran, además, están entre los mejores, que son los que más fácilmente encuentran ofertas interesantes en otros países. La pérdida va mucho más allá de los científicos que se

van, también hay que contar con los que se han quitado de la cabeza la idea de volver. España había emprendido hace casi una década una escalada notable en la I+D y numerosos investigadores que estaban fuera empezaron a optar a las plazas competitivas que ofrecía el sistema. Otros salían para completar su formación pero con la vista puesta en desarrollar luego su ciencia en España. Con los recortes presupuestarios y los recursos humanos estrangulados, ese flujo de regreso se ha cortado. Todavía hay un tercer factor

que agrava el panorama. Los científicos que regresaron a España con un compromiso de estabilización de su trabajo al concluir los contratos de cinco años —si obtenían evaluaciones positivas— se sienten defraudados y vuelven a irse. Difícil será atraerlos de nuevo con la promesa de financiación, un sistema de investigación vigoroso y una estabilización de su trabajo. Y los más jóvenes, con el panorama que ven a su alrededor, tampoco se sienten precisamente motivados para embarcarse en la ciencia española.

Un otoño decisivo para la ciencia

sociedad

ma de I+D no se limitan al dinero, aun cuando la financiación sea un escollo gigantesco. Otros atoladeros preocupan igualmente a los investigadores:

» **Retrasos y cancelaciones.** Ni una de las convocatorias importantes de proyectos de investigación, contratos o programas se han convocado, resuelto y financiado en los plazos habituales desde hace dos años. El caso más significativo es el de los proyectos del Plan Estatal de I+D+i. La última convocatoria se hizo en 2011, no salió la resolución publicada en el BOE hasta enero de 2013 y los científicos no empezaron a recibir la financiación hasta este verano. Además, se aprobó el pago

La financiación ha caído de 4.276 millones a 2.267 desde 2009

El colectivo no ha logrado reunirse con De Guindos y Santamaría

en cuatro anualidades, pese a la duración de tres años de los proyectos, y luego se rectificó volviendo a la trienalidad habitual. Un total de 3.184 proyectos están afectados y el presupuesto total para tres años era de 309 millones de euros. Alrededor de 6.000 científicos están pendientes de la siguiente convocatoria, que Economía no hizo en diciembre pasado y que ha ido aplazando: en mayo, antes del verano, en julio, en septiembre... Dado que una convocatoria de proyectos exige como mínimo nueve meses para completar la evaluación, selección y resolución, los científicos que resulten seleccionados no podrán recibir el dinero para empezar a trabajar a principios de 2014.

Tampoco las convocatorias de contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, para científicos formados y en formación, respectivamente, se han sacado, resuelto y financiado en los plazos previstos, además de sufrir recortes drásticos en número de plazas. En el caso de los contratos Juan de la Cierva, además, la resolución de los seleccionados en la última convocatoria está lista desde mayo y la Secretaría de Estado no ha publicado la propuesta de resolución final hasta la semana pasada. Han sido cinco meses de inútil espera para los elegidos. En esta situación de incertidumbre constante, los científicos se quejan de que tienen que estar diariamente más pendientes del BOE y de los rumores sobre convocatorias, plazos y pagos que de su investigación. Cinco centros de alto nivel fueron elegidos, en octubre de 2012, con las distinciones “de excelencia”; Economía no sacó la resolución definitiva hasta ocho meses después.

» **Recursos humanos.** La sequía de puestos de trabajo para los investigadores, no ya la creación de nuevas plazas, está estrangulando el sistema de ciencia, que no se ha incluido entre las excepciones

a la tasa de reposición general del Estado de uno por diez. Es decir, que de cada diez científicos que se jubilan, como mucho puede entrar uno nuevo. Y la edad media de los investigadores en España, en instituciones como el CSIC, sobrepasa ya los 50 años, y aumentando. En el CSIC se han cancelado todos los contratos JAE y, el año pasado, por no renovación, se perdieron unos 1.200 puestos. Este año rondará la misma cifra. Los contratados Ramón y Cajal (800 al año hace una década) se convocaron por última vez y con retraso de varios meses en octubre de 2012 y solo con 165 plazas. Además, los científicos que acaban los cinco años de contrato, tras pasar las evaluaciones, no encuentran modo de estabilizarse laboralmente. La buena noticia en recursos humanos ha sido la primera convocatoria de Formación de Personal Investigador, que ahora por primera vez, y cumpliendo la Ley de la Ciencia de 2011, significa cuatro años de contrato en lugar de becas.

» **El CSIC.** Con una reducción del 30%, desde 2009, en las transferencias que recibe anualmente del Estado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sufre la peor crisis que se recuerda. Tocó fondo este verano, cuando el Gobierno respondió con una asignación de emergencia de 25 millones de euros que suponen solo una cuarta parte de los 100 reclamados por su presidente, Emilio Lora Tamayo, como imprescindibles para mantener sus institutos. El ministro de Economía ha declarado repetidas veces que el Gobierno no dejará hundirse al CSIC. Pero la Secretaría de Estado de I+D+i cuenta, como mucho, con otros 50 millones de ayuda a la institución este año y los otros 25... tal vez en 2014. En julio el CSIC estalló en llamas cuando Lora Tamayo anunció una limitada disposición de los fondos de investigación, independientemente de que fuera dinero obtenido por los propios científicos en convocatorias competitivas españolas o internacionales. Muchos lo calificaron de *corralito*, con tanta indignación como preocupación por las perspectivas de su trabajo. Un adelanto de las transferencias del tercer trimestre de este año es el bálamo ideado por la secretaria de Estado para que el CSIC pueda hacer frente a facturas y salarios inmediatos. Pero el problema sigue pendiente.

» **Agencia de Investigación.** La comunidad científica española lleva reclamando desde hace una década la creación de una Agencia Nacional de Investigación, un organismo de gran autonomía científica que confiera estabilidad a la gestión de la ciencia al margen de vaivenes políticos, así como el necesario escenario económico plurianual para poder planificar y optimizar la inversión española en I+D. El referente a copiar es el exitoso Consejo Europeo de Investigación. Tan claro lo tenía Vela cuando asumió el cargo (a principios de 2012) que puso la agencia como prioridad de su gestión y se comprometió con una fecha máxima: junio de 2012, cuando acababa el plazo que estipula para la creación de la agencia la Ley de la Ciencia, el Desarrollo y la Innovación de 2011. No se ha cumplido ese mandato legal.

Señor ministro, no nos defraude otra vez

CARLOS ANDRADAS

Recientemente, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que en 2014 el presupuesto de I+D+i experimentará un aumento, por primera vez desde que comenzó la crisis. Se trata de una buena noticia, aunque habrá que esperar a ver cómo se concreta en cifras, de modo que no defraude las expectativas de la comunidad científica española, próxima ya a su nivel de saturación de declaraciones que no se corresponden con los hechos.

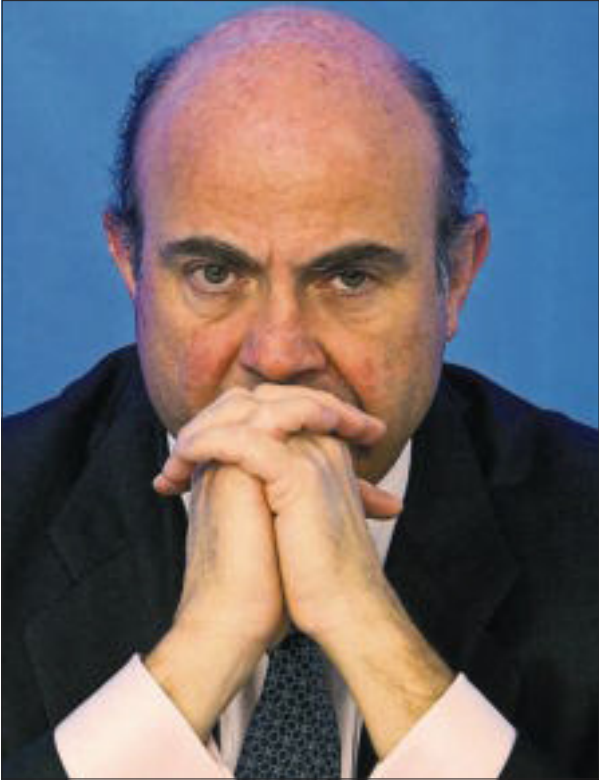
Para ello los incrementos deben ser significativos, aplicarse en los capítulos en los que se necesitan y ejecutarse íntegramente, no sea que nos encontremos con la paradoja de contar con un presupuesto aprobado mayor, pero con menos dinero disponible, como ya ha ocurrido en el pasado. Y es que, después de las duras peleas parlamentarias para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), estos parecen, a veces, papel mojado. Permítanme explicarme tomando como ejemplo el año 2012, el último ejercicio presupuestario cerrado, aunque lo que se describe no es un hecho particular ni aislado de ese año.

La cantidad aprobada en los PGE para I+D+i en 2012 en el Parlamento fue de 6.393,59 millones de euros (lo que supuso ya un 25% menos que en 2011). Pues bien, según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, el dinero finalmente consignado como presupuesto disponible para I+D+i fue de 5.049 millones, es decir, ¡1.340 millones menos de lo aprobado! ¿Estábamos los ciudadanos al corriente de esto? ¿Lo estuvieron / están los parlamentarios? Entonces, ¿para qué la pantomima de los 6.393 publicados en el BOE? ¿Para contar con una cifra suficientemente abultada con la que guardar las apariencias? De nada servirá incrementar la cifra inicial del presupuesto, si después el crédito final disponible (que en general ya pasa desapercibido o no es definitivo hasta muy avanzado el año) no se corresponde con esta cantidad.

Pero esto no es todo. Del presupuesto final consignado (esos 5.049 millones) solo se ejecutó el 54,7%. Es decir, prácticamente la mitad del presupuesto, ya de por sí extraordinariamente mermando, quedó sin utilizar y retornó a las arcas del Estado. Los 6.393 millones de partida que ya nos parecían insuficientes se han quedado reducidos a 2.764 sin una mínima explicación o sonrojo. Claro, es un negocio redondo para Hacienda.

¿Pero cómo es posible esto? ¿Que tengamos poco y no lo utilicemos? ¿Ineficacia? En absoluto, todo perfectamente previsto. Para entenderlo necesitamos recordar que el presupuesto de I+D+i se divide en dos grandes grupos: las subvenciones (dinero que el Estado da a las instituciones) y los préstamos (dinero que el Estado presta a las instituciones receptoras, que después deben reintegrar en los plazos e intereses que se estipulen).

Los préstamos constituyen más de la mitad del presupuesto total de I+D+i y el dinero no gastado proviene esencialmente de ellos. Por ejemplo, de su parte en I+D+i, el ministerio ejecutó solo en torno a la tercera parte de su presupuesto final en ese capítulo.



El ministro de Economía, Luis de Guindos. / BERNARDO PÉREZ

Un jugador de fútbol cuesta más que toda la formación doctoral

Solo se ha utilizado el 54% del dinero inicialmente asignado a I+D+i

Esto viene sucediendo así año tras año, como hemos denunciado reiteradamente desde la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE). Es muy sencillo: las instituciones públicas no pueden acceder a estos préstamos y el número de empresas privadas que recurren a ellos es muy limitado. Todos los responsables políticos lo saben, pero sin embargo, este mismo año 2013 se ha aumentado sensiblemente la partida de préstamos mientras se reducía en más de un 13% la de subvenciones. ¿Con qué objetivo? Evidentemente, poner una cifra que maquille la realidad en cuanto a la inversión

pública en I+D+i. Por eso, de nada servirá aumentar el presupuesto si no se pone allí donde hace falta y se utiliza, esto es, en forma de subvenciones para investigación, desarrollo e innovación.

Finalmente, el incremento debe ser significativo. Tras cinco años de descenso presupuestario continuado, la situación de la I+D+i española es tan crítica que el propio Gobierno ha tenido que aprobar partidas extraordinarias para que el CSIC, nuestro principal organismo de investigación, pueda llegar a final de año sin cerrar sus puertas y para que las actuaciones de 2013 previstas en el Plan Estatal de Investigación, aprobado por el Gobierno a comienzos de año, puedan ponerse en marcha. A título de ejemplo,

recordemos que la última convocatoria de proyectos de investigación, de la que depende la mayoría de la investigación de todo el país, fue en diciembre de 2011, hace prácticamente dos años. Por consiguiente, no basta con consolidar en los presupuestos estas partidas extraordinarias: con ellas solo conseguiremos mantener el estado de latencia actual. No podemos conformarnos con eso. Hace falta un esfuerzo suplementario para recuperar la energía que el sistema científico español ha demostrado en los últimos años y para frenar el éxodo obligatorio al que muchos de nuestros científicos jóvenes y menos jóvenes se ven impeli-

dos. Hace falta lanzar un mensaje nítido a los jóvenes de qué modelo de sociedad queremos. Y uno tiene la inevitable sensación de que, como dijo Tony Judt, “algo va mal” cuando un solo jugador de fútbol cuesta más que todo el plan estatal de formación de doctores.

La ciencia y la tecnología son la base de la economía del futuro de las naciones. Los ciudadanos así lo perciben cuando en una encuesta reciente han señalado al colectivo de científicos como el que les generaba una mayor confianza. Los investigadores somos gente entusiasta y deseosa de devolver a la sociedad esa confianza con nuestro trabajo y que este repercuta en el bienestar social. Como ya hemos dicho en varias ocasiones necesitamos regularidad en el sistema, certidumbre y predictibilidad. Y para ello el incremento presupuestario debe ser significativo, en forma de subvenciones y que se ejecute en su totalidad. Señor ministro, no nos defraude otra vez.

Carlos Andradas es presidente de la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE), miembro del Colectivo Carta por la Ciencia.